



BOLETIN INTERNACIONAL N° 4

La realidad hemisférica.
Estados Unidos y nuestra región.

BASE ESTADÍSTICA
SAMANTHA HORWITZ
JAVIER RAMERI
IGNACIO LOPEZ MIERES

INVESTIGADORES
GUSTAVO LAHOUD
ALEJANDRO LÓPEZ MIERES
HORACIO FERNÁNDEZ
TOMAS RAFFO
ANA RAMERI

COORDINACIÓN
GUSTAVO LAHOUD - CLAUDIO LOZANO

Boletín N°4. La realidad hemisférica. Estados Unidos y nuestra región.

En nuestro Boletín Internacional N° 3, trabajamos las tendencias globales que caracterizan el panorama de la coyuntura internacional, dando cuenta de los escenarios de cooperación y conflicto abiertos en distintas regiones del mundo.

Asimismo, abordamos los ejes estratégicos y geopolíticos determinantes, como así también el complejo mosaico de relaciones económicas, comerciales y financieras que están detrás de los acontecimientos identificados.

Como complemento de este informe, desarrollamos en las siguientes páginas los principales aspectos de las políticas hemisféricas en la región, es decir, intentamos describir y caracterizar los principales ejes de las relaciones entre Estados Unidos y nuestra región latinoamericana.

A su vez, se realiza un abordaje sintético de algunos de los procesos electorales abiertos en América Latina durante 2018 y las implicancias que los mismos tienen en función de los debates presentes en las esferas regionales y hemisféricas de relación.

I- Tendencias fundamentales. Más palos que zanahorias. Entre las agendas de seguridad y las prioridades económicas.

La asunción de Donald Trump en enero de 2017 impuso un giro muy significativo al vínculo con la región latinoamericana en su conjunto.

Una de las tendencias determinantes del nuevo período que se inaugura con Trump, está marcada por la reactualización de la Doctrina Monroe, lo cual implica la consumación de una renovada ofensiva sobre la región con múltiples objetivos. Entre ellos, se trata de asegurar el control y acceso a fuentes de recursos estratégicos energéticos, mineros e hídricos, junto con el control de áreas clave de las economías de la región vinculadas a los servicios financieros y comunicacionales, no sólo en las geografías de los gobiernos “aliados” al gran juego geoestratégico de los Estados Unidos, sino en aquellas regiones más hostiles o que aún mantienen una política exterior más o menos equidistante a los intereses concretos del país del norte.

A su vez, el nuevo tono monroísta¹ de la política exterior estadounidense- inaugurada por el ex Secretario de Estado, Rex Tillerson, y continuada por el nuevo ocupante del cargo, Mike Pompeo-, se ha manifestado en una fuerte reivindicación de las políticas de seguridad ligadas a la represión y control de las denominadas “nuevas amenazas”, entre la que contamos al narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, el tráfico de personas y otros delitos conexos. En efecto, esta estrategia no tiene nada de nuevo y, de hecho, se ha desplegado en las últimas décadas de la mano de gobiernos demócratas y republicanos, aunque en esta coyuntura, se evidencia una voluntad política decidida por parte del gobierno Trump en pos de concluir acuerdos de cooperación en materia de seguridad intensificando todo tipo de instrumentos y políticas que refuerzan los vínculos

¹ <http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/06/america-latina-y-ee-uu-un-retorno-a-la-doctrina-monroe/>

entre las áreas de política exterior, seguridad interior y justicia de los países involucrados. Es más, este tipo de propuestas se han discutido en forma permanente en las giras de los distintos funcionarios de los Estados Unidos, entre ellos, el vicepresidente Mike Pence, que entre 2017 y 2018 ha visitado algunos de nuestros países, con objetivos muy claramente enmarcados en estas prioridades. Asimismo, han surgido otro tipo de preocupaciones relacionadas con la cuestión Venezuela² y la reiterada presión diplomática del gobierno de los Estados Unidos en pos de una estrategia común de presión diplomática y económico-financiera contra el gobierno de Maduro. Sobre ello volvemos más adelante.

En concreto, entonces, una de las tendencias más preocupantes en el escenario internacional contemporáneo, y que ha generado, incluso, acciones muy concretas por parte de la Administración Cambiemos en Argentina y en Brasil con el Presidente Temer, es la que vincula crecientemente las problemáticas del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo con la necesidad imperiosa de adoptar agendas de carácter “securitista”, propaladas fundamentalmente desde los centros de poder estadounidenses a través de una compleja trama de agencias de seguridad, defensa e inteligencia.³

Esta particular cosmovisión, ha impactado fuertemente en las mismas agendas de seguridad, defensa y política exterior del gobierno nacional, en cuyos intersticios se han puesto en marcha discusiones y debates no tan públicos y explícitos, sobre la necesidad estratégica de nuestro país de responder a escenarios de “nuevas amenazas”, con configuraciones de actores e intereses diversos y complejos, situación que determinaría la asunción de “nuevos roles” por parte de nuestras Fuerzas Armadas en los límites mismos de lo que las legislaciones vigentes en materia de defensa nacional y de seguridad interior- respectivamente-, permiten y habilitan. En efecto, hacia fines de 2017 y comienzos de 2018, desde el Ministerio de Defensa se han tomado un conjunto de decisiones vinculadas tanto a adquisición de material bélico bajo parámetros de secreto de Estado, como la “instalación mediática” de ciertas líneas de acción orientadas a la posible constitución de una Fuerza de Despliegue Rápido compuesta por miembros de las tres armas a los efectos de servir de “apoyo logístico” y “coordinación de tareas de información y comunicación de inteligencia en tiempo real” a las fuerzas de seguridad que actúan en el terreno en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. En tal sentido, toda nuestra región del Noroeste y del Noreste- con epicentros en Salta y Misiones⁴-, serían los lugares indicados para poner en marcha este tipo de “acciones de coordinación y apoyo” que se harían bajo el estricto marco de las legislaciones vigentes que, recordemos, separan abierta y claramente las cuestiones e incumbencias de acción de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. En concreto, estas últimas no pueden ser operacionalizadas para tareas de inteligencia o seguridad interior, sino que sus misiones esenciales están relacionadas con la defensa de la integridad territorial, soberanía, bienes y modo de vida de nuestra comunidad ante la posibilidad de amenazas o actos de agresión perpetrados por actores externos que son solamente otros Estados nacionales, tal como ha sido establecido en el Decreto 727 de 2006⁵, a través del cual la administración Kirchner reglamentó la ley de Defensa nacional.

² <https://www.excelsior.com.mx/global/mike-pence-inicia-su-tercera-gira-por-latinoamerica/1247923>

³ https://www.clarin.com/opinion/triple-frontera-reacomodo-geopolitico_0_HJine4vuM.html

⁴ https://www.clarin.com/opinion/triple-frontera-reacomodo-geopolitico_0_HJine4vuM.html

⁵ <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116997/norma.htm>

Ahora, más allá que estas decisiones no se han materializado aún a comienzos de 2018, no deja de ser sugestivo que, tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde el Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores, parece abrirse paso a una agenda multitemática que vincula el “nuevo rol internacional” de la Argentina con su “vuelta al mundo” y con una altísima exposición global lograda por el hecho que hemos sido anfitriones tanto de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio- realizada en diciembre de 2017 en Buenos Aires-, como de la reunión del G-20- que se desarrollará en Buenos Aires en noviembre/diciembre de 2018-, con la consolidación de agendas abiertamente proclives a los acuerdos multilaterales de comercio- como ya se comentó en informes previos- y a la simultánea aceleración de agendas securitistas en el ámbito de las políticas de seguridad- con eje central en el “combate al narcotráfico” a través de nuevos y aceitados vínculos con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y otras agencias federales de ese país- y, finalmente, con la adopción de cambios que devienen en políticas más o menos híbridas en la naturaleza y alcance de las misiones de las Fuerzas Armadas⁶, cuyo rol y despliegue aparecen cada vez más vinculados con ciertas cosmovisiones que corporizan “enemigos internos” que podrían responder a lógicas desestabilizadoras y, como tales, portadoras de amenazas sui generis ante las que se debe responder en formas sui generis.

En esta panoplia de cuestiones, se registran miradas oficiales más o menos ocupadas en los posibles desafíos que el terrorismo internacional podría imponer a través de “supuestas células del Hezbollah”⁷ que actuarían en la zona de la Triple Frontera argentino-paraguaya-brasileña, hasta la necesidad estratégica de “preservar la integridad de nuestros recursos naturales” en áreas sensibles y de alta conflictividad como la zona de Vaca Muerta en la cuenca neuquina. En este último caso, veamos el derrotero de los acontecimientos entre fines de 2017 y comienzos de 2018, a propósito de la muerte violenta de Rafael Nahuel- miembro de la comunidad mapuche de Bariloche-, a manos de fuerzas federales de la Prefectura, investigación que está en un completo estado de parálisis.

Justamente, en lo que respecta a la provincia de Neuquén, y en este contexto, se difundió la decisión adoptada por el gobierno provincial vinculada a la instalación de un supuesto centro de operaciones logísticas para atender emergencias humanitarias. En este sentido, una de las estrategias solapadas de los Estados Unidos en toda la región latinoamericana, viene de la mano de la instalación de bases logísticas configuradas específica y supuestamente para actuar ante desastres naturales y catástrofes, brindando asistencia humanitaria a las poblaciones, al tiempo que, en los hechos, lo que se consolida es un preocupante antecedente de presencia híbrida, confusa y errática de miembros de fuerzas armadas extranjeras- en este caso, de los Estados Unidos-, cuyas misiones específicas estarían respaldadas legalmente a través de acuerdos firmados por las jurisdicciones políticas involucradas e instituciones militares o de seguridad, como es el caso del Comando Sur.⁸

En el caso específico de la provincia de Neuquén, hacia comienzos de mayo de 2018, miembros de la oposición política al gobierno de esa provincia, denunciaron la firma de un convenio entre el

⁶ <http://www.lanacion.com.ar/2108923-sin-fronteras-entre-la-defensa-y-la-seguridad>

⁷ <http://www.ambito.com/912152-la-task-force-de-bullrich-en-el-nea-tiene-olor-a-humo>

⁸ https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201806201079728710-eeuu-latinoamerica-bases-militares/

Ejecutivo provincial y el Comando Sur para la instalación de una base humanitaria. Luego, se edulcoró el asunto y se vinculó esa propuesta con un centro de atención ante catástrofes, que sería ubicado, sugestivamente, en lugares cercanos a las explotaciones petroleras, lo cual indicaría que se busca propiciar la presencia de este tipo de emplazamientos como un modo solapado de "custodiar" los intereses de las empresas petroleras estadounidenses en la región. En concreto, según manifestaron diputados opositores, se proyecta la instalación de esa base en la Autovía Norte, que une a través de 19 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes a Vaca Muerta (y a Neuquén Capital) y es, además, un punto estratégico con acceso al aeropuerto y está cercano a los ríos Limay y Neuquén, reservas hídricas fundamentales no sólo para la provincia, sino para Río Negro también.⁹

Es importante tener en cuenta que el Comando Sur tiene **bases de operaciones en más de 10 países de América Latina, y se han instalado este tipo de centros bajo la figura de Emplazamientos Cooperativos de Seguridad o Centros de Operaciones de Emergencia**¹⁰ para uso de los organismos de Defensa Civil, lo cual genera permanentemente todo tipo de suspicacias. Es más, en la Argentina, hubo un antecedente de esta propuesta en Resistencia, Chaco, cuando el por entonces gobernador Jorge Capitanich propuso la instalación de un centro de estas características en 2012. En ese momento, se generó un gran revuelo mediático y político y el proyecto fue reformulado, pero sí se corroboró que en su confección tuvo activa participación el comandante y ex agregado militar estadounidense, Edwin Passmore, conocido como uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia militar en Latinoamérica.¹¹

Es esta dinámica compleja y aún no del todo explicitada, pero que desorienta y preocupa por su "hibridez" y falta de claridad, la que está detrás de esta reconfiguración global que abarca la agenda de tres ministerios y que se inscribe, inequívocamente, en la autopercepción del gobierno nacional de una "nueva era" en América Latina y el mundo, bajo cuyos auspicios resulta fundamental consolidar la tan mentada "vuelta al mundo". Asimismo, este tipo de interacciones sui generis, plantea en la Argentina inquietantes desafíos, ya que, como afirma Juan Gabriel Tokatlian en una sugestiva nota sobre la Triple Frontera,

"En breve, la pieza faltante para un giro geopolítico trascendental respecto a la Triple Frontera es Brasil. Y el papel de tramitador de los objetivos estadounidenses en esa zona parece ser la Argentina a través de su Ministerio de Seguridad ante el elocuente silencio de la Cancillería."¹²

⁹ https://www.clarin.com/politica/unidos-construira-base-ayuda-humanitaria-neuquen_0_B1txmiW1m.html

¹⁰ https://www.clarin.com/politica/unidos-construira-base-ayuda-humanitaria-neuquen_0_B1txmiW1m.html

¹¹ https://www.clarin.com/politica/unidos-construira-base-ayuda-humanitaria-neuquen_0_B1txmiW1m.html

¹² Tokatlian, Juan Gabriel; "Triple Frontera: reacomodo geopolítico", Debate, Clarin, 12 de marzo de 2018.

Consultada el 20/07/2018 en: https://www.clarin.com/opinion/triple-frontera-reacomodo-geopolitico_0_HJine4vuM.html

Simultáneamente a estos preocupantes escenarios, la situación en Brasil se degrada sin pausa al compás de la profundización de las estrategias securitistas del gobierno de Michel Temer, quien dio una nueva vuelta de tuerca al involucramiento de las fuerzas militares en el combate a las redes de narcotráfico y crimen organizado en Río de Janeiro, para lo cual se instrumentó el directo control de los aparatos represivos y de seguridad por parte de las mismas fuerzas armadas brasileñas¹³. A su vez, el agravamiento de la represión política sorbe líderes comunitarios y sindicales y el mismo encarcelamiento de Lula Da Silva como consecuencia del proceso de investigación denominada Lava Jato, imponen una intensificación del escenario de conflicto social. En efecto, con Lula preso, y con su candidatura a presidente ratificada por el PT pero claramente amenazada ante la posibilidad que las instancias jurídicas electorales intenten censurarla, y en el contexto de un ajuste económico y social muy duro, resulta previsible que un gobierno de estas características haya adoptado una posición abiertamente represiva y en línea con las visiones hemisféricas propaladas por los Estados Unidos.¹⁴

También debe tenerse en cuenta que estas estrategias securitistas y las implicancias de un enfoque más agresivo de los Estados Unidos, se observan en otras áreas del vínculo hemisférico. Así, en lo que respecta a la problemática de las migraciones, Trump ha adoptado un claro enfoque represivo que, incluso, intensifica las líneas de policialización de las políticas migratorias que existían bajo la administración Obama. En efecto, tanto México como América Central son las áreas que se ven abiertamente presionadas por el gobierno estadounidense en pos de frenar el flujo migratorio creciente, lo que derivó no sólo en la denominada actualización de la “política del muro” en la frontera con México, sino en la presión directa sobre este conjunto de países a los efectos que establezcan medidas de control y represión de los flujos migratorios de forma tal que miles y miles de seres humanos que huyen en busca de mejores condiciones de vida vean imposibilitado su acceso a los Estados Unidos. De hecho, en la última gira realizada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence¹⁵, se trató muy específicamente esta problemática tanto en México como en Guatemala y Honduras. Por cierto, simultáneamente asistíamos a hechos francamente deplorables, como los que sucedieron a fines de junio cuando las autoridades migratorias de los Estados Unidos, decidieron separar a los padres de familias migrantes de sus hijos, quienes fueron “exhibidos” en jaulas o cárceles provisoriamente acondicionadas a tales fines. Esto generó una alarma generalizada no sólo en nuestra región y en organizaciones de derechos humanos, sino entre la propia dirigencia política de los Estados Unidos, ante lo cual se revirtió la medida puntual, pero de ninguna manera se reorientó el criterio estigmatizador y represivo de la política migratoria estadounidense.¹⁶

Por otro lado, la presión diplomática sobre Venezuela, el mayor involucramiento de Colombia como aliado central de los Estados Unidos en la región caribeña del norte sudamericano en la

¹³ <https://www.pagina12.com.ar/106267-fortalecidos-los-militares-juegan-a-ganar>

¹⁴ <https://ipypp.org.ar/2018/04/19/brasil-el-proceso-a-lula-la-crisis-institucional-y-el-contexto-internacional-boletin-internacional-n-2/>

¹⁵ <https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/pence-se-reunira-el-jueves-con-lideres-de-centroamerica-por-crisis-migratoria>

¹⁶ <http://www.ambito.com/925070-trump-enfrenta-fuerte-repudio-por-separar-familias-de-inmigrantes-y-poner-ninos-en-jaulas>

“gestión” del asunto venezolano, y la conformación de un grupo de países en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)- el denominado Grupo de Lima¹⁷, integrado por 14 estados entre ellos Argentina, Brasil y México-, dirigido a establecer una presión diplomática permanente sobre el gobierno de Maduro, constituyen un conjunto de aspectos que deben ser observados con cuidado en la actual coyuntura, ya que trasunta el objetivo deliberado de los Estados Unidos de volver a operativizar a la OEA en función de sus intereses interamericanos, a través de presiones diplomáticas y económicas abiertas, blandiendo en forma permanente las denuncias de “ilegitimidad” contra el gobierno venezolano y buscando una “salida” que bien puede ser leída en términos de “cambio de régimen”.

En concreto, más allá de las evaluaciones y las posiciones específicas sobre la actualidad político-institucional venezolana- que debe ser motivo de debate permanente en todos los espacios políticos de la región y, más aún, en los sectores de izquierda-, lo que resulta harto evidente es que los Estados Unidos persigue una estrategia de desestabilización permanente a través de medios e instrumentos de muy diverso tipo, configurando una estrategia de amplio espectro y que suele ser muy propicia en escenarios políticos surcados por altos niveles de enfrentamiento interno. En ese sentido, la situación de Nicaragua y las crecientes manifestaciones populares contra Daniel Ortega¹⁸, han configurado un conjunto de cuestiones donde no sólo parecen identificarse maniobras dirigidas a la “liquidación” de los procesos políticos, sino que también se pueden observar fuertes signos de desarticulación político-institucional y socio-económica, que mucho hablan de graves ineficiencias en los propios procesos de gobierno de los países involucrados. En esta línea, es muy remarcable un artículo de Boaventura de Sousa Santos, quien trabaja sobre un conjunto de aspectos que van desde las problemáticas asociadas al aburguesamiento y parálisis de la capacidad transformadora y autoorganizativa del movimiento revolucionario sandinista, el surgimiento de propuestas pragmáticas vinculadas al “mantenimiento del poder” y los acuerdos subsiguientes con los actores y grupos de presión conservadores de la sociedad, hasta la extensión de la corrupción, la impunidad y el agravamiento del carácter represivo del gobierno junto con las consecuencias de la profundización de un modelo económico primarizado y extractivista.¹⁹

Finalmente, otro hecho que debe señalarse con particular preocupación, y que está totalmente relacionado con lo que se describe en el ámbito hemisférico y en consonancia con el “relineamiento” pro estadounidense de muchos de los países con gobiernos de derecha y centroderecha, es la oficialización de la suspensión de la membresía de seis países integrantes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)²⁰, decisión adoptada en abril de 2018.²¹ Se trata de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Colombia, es decir, la mitad de los miembros plenos de la organización que, mediante un comunicado común, alegaron el estado de parálisis de la

¹⁷ <https://www.peruoqa.org/declaracion-del-grupo-de-lima/>

¹⁸ <https://www.pagina12.com.ar/128709-las-venas-abiertas-de-nicaragua>

¹⁹ <https://www.pagina12.com.ar/128709-las-venas-abiertas-de-nicaragua>

²⁰ La UNASUR fue creada en 2008, bajo los influjos de la política exterior brasileña y en el marco de una consolidación incipiente de los procesos de integración que tenían eje en tres de los países más importantes de Sudamérica: Argentina, Brasil y Venezuela.

²¹ <https://www.pagina12.com.ar/110068-una-decision-irracional>

UNASUR y la imposibilidad de avanzar en el nombramiento de nuevas autoridades, luego de la finalización del mandato de Ernesto Samper, ex presidente colombiano quien fue el último Secretario General del bloque. Por cierto, más allá de los planteos “institucionalistas”, lo que puede observarse en esta decisión, es la voluntad política de estos países en pos de construir agendas que están crecientemente vinculadas con los intereses hemisféricos de los Estados Unidos y con la construcción de “nuevas herramientas” de cooperación política y de integración económico-comercial y financiera, que refieren al ya mencionado realineamiento estratégico.²²

En este punto, resulta fundamental exponer algunas consideraciones que remiten a otra de las tendencias hemisféricas y regionales que son parte de este realineamiento general de la región. Nos referimos a las políticas económicas, comerciales y de inversiones, ligadas a las perspectivas del avance de acuerdos de libre comercio que sean abiertamente proclives a la consolidación del vínculo con los Estados Unidos. En este sentido, la Alianza del Pacífico- integrada por México, Colombia, Perú y Chile- aparece como un proyecto de integración abierto al mundo que, en la presente coyuntura, busca complementarse con el muy debilitado MERCOSUR²³, cuyos gobiernos han reorientado abiertamente sus visiones económicas y comerciales hacia la profundización de los vínculos con Estados Unidos y la consolidación de las perspectivas de avance geoeconómico hacia la vasta región de Asia Pacífico.

Estas posturas remiten a la búsqueda de acuerdos aperturistas enmarcados en los ejes estratégicos del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, a tal punto que las agendas de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia y Perú parecen converger en criterios de “unidad sudamericana” pensados en términos de ejes comunes para la inserción de nuestras economías en los mercados externos. De hecho, ello parece haber sido corroborado por la reunión conjunta de cancilleres del Mercosur y la Alianza del Pacífico, que se realizó en Buenos Aires a comienzos de abril de 2017. En efecto, en la mencionada reunión se pusieron sobre el tapete los modos y las estrategias de cooperación intrarregional en función de la viabilidad de agendas de apertura con distintas regiones del mundo, aunque también se enfocaron las agendas en el objetivo estratégico de mejorar en forma persistente los alicaídos niveles de comercio intrarregional latinoamericanos, que se ubican en el 18% del comercio total de la región, cifra muy baja en relación al 69% del comercio intrarregional de la Unión Europea y al 55% de Asia.²⁴ Asimismo, esta voluntad se ha manifestado de manera inalterable en la nueva cumbre entre Mercosur y la Alianza del Pacífico realizada en julio de 2018 en México, a pocos días de la elección de Andrés López Obrador como nuevo presidente.²⁵

Por cierto, esta “voluntad diplomática multilateral” orientada a la profundización de vínculos comerciales intrarregionales, no puede ser leída fuera de los marcos existentes en materia de integración productiva y de cadenas de valor en nuestros espacios geográficos latinoamericanos,

²² <https://www.pagina12.com.ar/110067-pobres-en-el-sur>

²³ <http://es.mercopress.com/2018/06/21/cumbre-de-jefes-de-estado-de-alianza-del-pacifico-y-mercosur-en-mexico>

²⁴ <https://www.pagina12.com.ar/30504-una-apuesta-que-va-contra-la-corriente>

²⁵ <http://es.mercopress.com/2018/06/21/cumbre-de-jefes-de-estado-de-alianza-del-pacifico-y-mercosur-en-mexico>

objetivos sobre los que no se han avanzado pasos firmes y consistentes en las últimas décadas, más allá, incluso, de las orientaciones ideológicas y programáticas de las distintas administraciones de la región. En concreto, estimamos que la correcta evaluación y apreciación del entorno comercial regional y mundial y la pertinencia de sus desafíos y prioridades, debería estar en línea con un adecuado diagnóstico de las capacidades y potencialidades de integración de nuestros países en materia de infraestructura, telecomunicaciones, energía y transporte, entre otras áreas fundamentales.

Aquí se configura, entonces, un escenario que será importante relevar a futuro, ya que la contracara de la evolución de un esquema de “*plataforma comercial exportadora*” es el debilitamiento de las estrategias de cooperación y concertación político-diplomáticas y económicas entre los mismos países de la región latinoamericana, en perspectiva de lo que fue la incipiente construcción de nueva institucionalidad a través de la UNASUR y la CELAC durante la primera década de este siglo. Ante este panorama, no resulta extraña la decisión adoptada por varios países sudamericanos con el objetivo de “desactivar” el rol de la UNASUR. Sobre ello, el académico argentino Nicolás Comini expuso interesantes argumentos, al señalar que

“...una inserción racional y verdaderamente inteligente debería implicar intentar capitalizar la totalidad de la arquitectura regional al alcance de la mano, la cual abarca desde la OEA hasta la Celac, la Aladi, el Mercosur, la AP y, por supuesto, la Unasur.”²⁶ De esa manera, “...cada plataforma podría contribuir a potenciar la capacidad de Argentina de incidir en la definición de la agenda regional”²⁷; sin embargo, no es esto lo que se realizó, sino más bien se buscó adoptar una posición en línea con una estrategia de inserción regional y global muy ideologizada²⁸ y bajo la idea fuerza ya trabajada de “volver al mundo”.

Incluso, los modestos avances que se habían logrado en los últimos años en lo que respecta a la posibilidad de “gestionar” nuestros propios conflictos sudamericanos a través de estrategias de concertación y coordinación político-diplomáticas en el marco de la UNASUR, crujieron al compás de la asunción de nuevos liderazgos de centro derecha y derecha fuertemente contestatarios a los procesos nacional-populares que hegemonizaron la región sudamericana en los últimos años. En efecto, los graves problemas acumulados en términos de negativas gestiones gubernamentales, junto a la consolidación de procesos de corrupción público-privado generalizados, que han puesto en serio peligro los avances logrados en términos de reparación social y económica de grandes mayorías populares, han sido el caldo de cultivo propicio para pavimentar el avance de nuevos procesos políticos conservadores en nuestra región. Y, en ese marco, la dolorosa crisis venezolana-acicateada por actores e intereses internos y externos, que atraviesan desde el oficialismo hasta la oposición- y el proceso de destitución parlamentaria de la ex Presidenta Dilma Rousseff en Brasil, junto con la extensión de las redes público-privadas de corrupción del establishment brasileño, son dos de los emergentes de una situación política, económica y social que ha debilitado fuertemente la capacidad de influencia, liderazgo, coordinación y complementación efectivas de nuestros países.

²⁶ Véase Comini, Nicolás; “Una decisión irracional”, Opinión, Página 12, 23 de abril de 2018. Artículo consultado el 20/07/2018. <https://www.pagina12.com.ar/110068-una-decision-irracional>

²⁷ Comini, op. Cit.

²⁸ Comini, op. Cit.

Es, entonces, en ese contexto en el que opera la política exterior de Macri y sus “compromisos” de nuevo cuño con algunos de los actores triunfantes en el turbulento escenario regional.

Lo concreto es que los niveles de comercio interregional fueron sensiblemente deteriorados en los últimos años tanto por la preeminencia de proyectos exportadores de materias primas y reprimarizadores de nuestro sistema productivo, como por la carencia de proyectos de integración física al interior del enorme espacio territorial sudamericano. Ello resulta aún más acuciante, ante la consolidación de un patrón productivo de carácter extractivo en buena parte de nuestra región, cuyo sesgo primarizador se ha agravado al compás del crecimiento de China como socio comercial estratégico. De hecho, en la última década, el gran país asiático ha aumentado su cuota importadora e inversora en América Latina, mientras nuestros países debilitaron sus propios nexos comerciales intrarregionales, fenómeno que ha impactado severamente en el comercio entre Brasil y Argentina, cuyo peso específico se ha reducido en forma significativa en los últimos años en comparación con los comienzos del año 2000. En concreto, “...la participación del país vecino en el comercio exterior argentino es la más baja desde la creación del Mercosur... La incidencia el año pasado fue del 20 por ciento, la más baja de los últimos 25 años.”²⁹

Por otro lado, dentro de las tendencias descritas en las dinámicas de intercambios económicos y comerciales, la situación de México y su vínculo con Canadá y Estados Unidos a través del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), debe examinarse con particular cuidado. En efecto, desde la llegada de Trump, uno de los aspectos relevantes de su agenda revisionista en materia económico-comercial ha sido la renegociación integral del acuerdo del NAFTA, en busca de lograr un reordenamiento de los esquemas vigentes de intercambio comercial en los distintos sectores económicos, que sea favorable al objetivo de crear mayores empleos en los Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones han quedado empantanadas, ya que los Estados Unidos busca una renegociación que incluya capítulos nuevos que van desde la liberalización integral de servicios, la introducción del comercio electrónico y los sectores de la nueva economía ligados a lo infocomunicacional, la mayor protección de patentes y normas más abiertas en los procesos de licitaciones públicas. Asimismo, los Estados Unidos buscan un reordenamiento de los flujos de bienes en los sectores primarios agrícola ganaderos y en las actividades industriales fundamentales, todo lo cual afecta en grado significativo al sector primario mexicano y al mismo funcionamiento de las industrias maquiladoras que, en muchos casos, son actividades de ensamblaje controladas por capitales estadounidenses. A su vez, en casi 25 años de vigencia del NAFTA, buena parte de los sectores económicos mexicanos han agravado su dependencia comercial de los Estados Unidos complejizando las estrategias de diversificación productiva y comercial. Ante este escenario, la reciente elección de López Obrador en México, ha abierto un interesante compás de espera en un contexto en el que la administración Trump parece orientar su propuesta hacia el nuevo gobierno mexicano, bajo un nuevo criterio negociador que buscaría la firma de un tratado comercial bilateral, al tiempo que ocurriría lo mismo con Canadá, el tercer socio del NAFTA.³⁰

²⁹ <https://www.pagina12.com.ar/18823-de-terror-para-la-industria>

³⁰ <https://www.pagina12.com.ar/129557-trump-se-acerca-a-putin-y-lopez-obrador>

En este contexto de negociaciones empantanadas, la situación se agravó aún más ya que la administración Trump adoptó políticas de imposición de aranceles al acero y al aluminio y a otros sectores industriales y de bienes, situación que ha tensado aún más el vínculo no sólo con México, sino con Canadá. De hecho, luego que el Departamento de Comercio comunicara el establecimiento de aranceles en abril de 2018, abriendo un impasse negociador con el conjunto de actores perjudicados por la medida- entre ellos, la Unión Europea, China y otros países-, hacia mediados de junio se adoptaron las mencionadas medidas generando una intensificación de las declaraciones de conflictividad comercial que involucra a algunos de los aliados estratégicos- México, Canadá, Unión Europea- y a países de enorme peso específico como China³¹. Vale decir que Brasil y Argentina, que accedieron rápidamente a ofrecer una propuesta más flexible a cambio de preservar menores cuotas de mercado para productos como el acero y el aluminio, fueron excluidos del conjunto de países castigados por la medida arancelaria.

A su vez, el factor energético es y será clave en el vínculo de Estados Unidos, Canadá y México, ya que buena parte de las políticas vinculadas a la explotación masiva de los recursos hidrocarbúricos no convencionales- desde las arenas bituminosas y el gas canadiense, pasando por el cinturón este-oeste del fracking norteamericano, hasta la “promisoria” explotación masiva de los recursos no convencionales y de aguas profundas en el golfo de México-, dependen de un definitivo avance de las estrategias de integración enmarcadas en la denominada “seguridad energética norteamericana”³², que es una de las áreas centrales a las que el gobierno Trump dirige la mirada con el objetivo de lograr un control hegemónico de los negocios vía la mayor liberalización y flexibilización posibles del entorno inversor en el mercado energético.

Una vez concluido este balance hemisférico y regional, veamos un último punto en el que registramos algunos aspectos puntuales de los procesos eleccionarios acaecidos en la región en 2018.

II- Las elecciones en la región y algunos interrogantes con inciertas respuestas.

Ante este turbulento e incierto escenario global y regional, en algunos países de nuestra región se han realizado o se prevé la realización de elecciones de renovación de autoridades.

En efecto, durante el primer semestre de 2018, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Colombia y México, han atravesado por procesos eleccionarios en los que se han puesto en juego, directa o indirectamente, aspectos centrales de las propuesta económicas y de posicionamiento externo de los respectivos países, al tiempo que, al cabo de las mismas, se han legitimado escenarios diversos, que

³¹ <https://www.cronista.com/internacionales/China-y-EE.UU.-libran-la-mayor-guerra-comercial-de-la-historia-20180706-0037.html>

³² La idea de la estrategia de seguridad energética norteamericana, está directamente vinculada con los objetivos de la agenda de seguridad planteados por los Estados Unidos en los últimos años. En ese sentido, la clave de la expansión de esa agenda energética es el vector de los recursos no convencionales, cuya expansión productivista es prioritaria para las grandes empresas estadounidenses en todo el hemisferio.

están en buena medida vinculados al devenir de los procesos políticos institucionales y económico sociales internos.

A su vez, otros países como Chile han inaugurado un nuevo proceso político, concluido a fines de 2017, con una alianza de derecha que repone en el poder a Sebastián Piñera, culminando un proceso de alternancia política con los sectores de la concertación democrática, bajo el liderazgo de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Por otra parte, en octubre se realizarán elecciones en Brasil, que atraviesa un particular escenario político, con el ex presidente Lula en prisión a partir de decisiones judiciales adoptadas en la investigación del denominado Lava Jato. En este punto, es fundamental tener en cuenta que hacia mediados de agosto deben oficializarse las candidaturas políticas, de manera tal que las máximas instancias jurídicas electorales tienen en sus manos la ratificación o no de lo que ya es un hecho para las autoridades del PT y partidos aliados, que han oficializado la candidatura presidencial de Lula.

En lo que respecta a los países en los que se han realizado los procesos electorarios, los casos de Costa Rica, Colombia y Paraguay, marcan una continuidad en líneas generales con la corriente dominante en la región, vinculada al realineamiento geoestratégico con los Estados Unidos. Si bien los ejes temáticos predominantes en la agenda pública están atravesados por las prioridades domésticas leídas en función de las distintas opciones ideológicas en juego, los grandes ejes que determinan la orientación de las políticas exteriores de los países concernidos están muy directamente vinculados con las agendas económico-comerciales y de seguridad orientadas por las concepciones estratégicas de la administración Trump.

En Paraguay³³, el protagonismo hegemónico del Partido Colorado, se reafirmó con la elección de Mario Abdo Benítez (hijo de quien fue secretario privado del ex presidente Alfredo Stroessner) como presidente de la República, mientras que en Colombia, la victoria en segunda vuelta del candidato derechista Iván Duque- abiertamente relacionado con el ex presidente Álvaro Uribe-, impuso serias dudas a la consolidación de una agenda político-institucional que giraba en torno al proceso de paz con las FARC, cuya institucionalización e implementación definitiva, era uno de los grandes objetivos del ex presidente Santos. Sin embargo, debe recordarse que el referéndum al que se convocó para la ratificación popular del proceso de paz, se topó con una ajustada derrota de la posición favorable al acuerdo, lo que obligó a encarar un proceso de revisión parcial de la mano de la presión pública ejercida por el uribismo, que luego de la victoria de Duque reafirmó su decisión de revisar el acuerdo. A su vez, la izquierda conducida por una coalición liderada por Gustavo Petro- ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá-, logró erigirse como una referencia importante en torno a la cual, tal vez, pueda potenciarse un proyecto de izquierdas en el futuro mediato.

En cualquier caso, el alineamiento privilegiado con Estados Unidos, a través de una reestructuración del Plan Colombia y de un proceso de financiamiento permanente de las fuerzas

³³ <http://www.jornada.unam.mx/2018/04/21/opinion/022a1mun>

armadas y de seguridad colombianas, junto con una estrategia de coordinación entre distintas agencias del Estado de ambos gobiernos, configuran los aspectos dominantes del vínculo hoy fortalecido. Como parte de ello, debe mencionarse la propuesta apoyada por los Estados Unidos para que Colombia pueda integrar la OTAN, situación que, de corroborarse, implicaría una peligrosa deriva hacia posiciones injerencistas extracontinentales. En concreto, Colombia ha sido incorporada a la OTAN como "socio global", lo que no implica una membresía plena, ya que el país no forma parte del Atlántico Norte. Sin embargo, este ingreso le permitirá acceder a entrenamiento militar, cooperación y preparación ante ciberataques, construcción de capacidad en seguridad marítima y mejoramiento de programas de educación militar, entre las principales actividades. Se supone que el país no estaría obligado a enviar efectivos militares a distintas operaciones definidas por la OTAN y, por ende, la factibilidad del despliegue militar quedaría fuera del radio de acción previsto. En este sentido, no resulta extraño que al momento de divulgarse esta noticia, la reacción del gobierno venezolano fue inmediata y ligó esta decisión a la posibilidad que la OTAN pueda formar parte, en el futuro, de alguna acción bélica contra Venezuela, intensificando el escenario de sospechas y acusaciones cruzadas entre ambos países.³⁴

Más aún, esta situación geoestratégica es altamente preocupante extramuros y dentro de nuestra región, cuando es de público conocimiento que existen históricos reclamos soberanistas como el de la Argentina por las Malvinas, Georgias, Sandwich y las aguas adyacentes en el Atlántico Sur, por citar sólo una de las áreas críticas para la reafirmación soberana de nuestros países. Ello es aún más complejo, si se recuerda que todos los organismos regionales sudamericanos han expresado su apoyo irrestricto al reclamo de soberanía argentino.

Por su parte, el caso venezolano, agrega otros aspectos que nos permiten ver su excepcionalidad y la preocupante deriva de la dinámica institucional. En efecto, la reelección de Nicolás Maduro se produjo en un contexto en el que una parte importante de los actores de la oposición han decidido no participar del proceso electoral bajo acusaciones de ilegitimidad y en un contexto excepcional en el que funciona una Asamblea Constituyente con plenos poderes desde mediados de 2017. Sólo un núcleo más reducido de la oposición política participó de las elecciones y, luego de la ratificación de los resultados a fines de mayo de 2018, se produjo una previsible y renovada presión diplomática y económica de los Estados Unidos y del llamado Grupo de Lima³⁵, maniobra en la que Argentina participó con especial ímpetu, al solicitar un pronunciamiento general de no reconocimiento del triunfo de Maduro. En este contexto, solo Bolivia y Nicaragua se han mantenido incólumes en su apoyo al gobierno, mientras que la "estrategia de desgaste" encarada por los Estados Unidos, agravada por la fenomenal crisis económica y el avance del bloqueo financiero sobre el país, están generando nuevas condiciones para un reverdecimiento del conflicto interno y regional, con peligrosas consecuencias, fundamentalmente para los venezolanos, pero también para el resto de la región. Un aspecto doloroso de la crisis, es la emigración significativa de miles de venezolanos, que se afincan en precarias condiciones en Colombia y Brasil, fundamentalmente, y en otros países, como Argentina.

³⁴ <http://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-socio-de-la-otan-pero-no-miembro-DG8778665>

³⁵ <http://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/grupo-de-lima-presentara-resolucion-sobre-venezuela-en-asamblea-de-la-oea-225696>

Por su parte, el caso de Cuba merece una especial atención. En efecto, en abril de 2018 se produjo la asunción del nuevo presidente cubano, Miguel Díaz Canel³⁶, quien sucede a Raúl Castro y se erige, así, en el primer jefe de Estado que pertenece a una nueva generación de mandos medios que se han ido forjando en distintos puestos en la administración del gobierno del hermano país. Lo que nos parece relevante señalar en este panorama, es que el nuevo presidente reafirma la línea de cambios reformistas operados por Raúl Castro, al tiempo que avanza en un proceso de reforma constitucional que será seguramente el eje de los debates y propuestas institucionales que se orientarán en la nueva etapa que comienza con Díaz Canel. En cualquier caso, la preocupación central del gobierno cubano, pasa por la consolidación de una postura de política exterior que reafirma el rechazo al supremacismo hegemónico de la política America First de Donald Trump, la reanudación del camino de diálogo y entendimiento comenzado en las postrimerías de la era Obama, y la ratificación de una voluntad integracionista con América Latina, haciendo eje en la defensa de Venezuela y de su régimen político.

Finalmente, el caso de México, entregó una perspectiva novedosa, ya que la alianza liderada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), MORENA, logró el triunfo en las elecciones del 1 de julio por más del 53% de los sufragios. La victoria de AMLO³⁷ se cimentó en una agenda de cambio social y económico, centrada en el combate a la impunidad y corrupción de las elites económicas y políticas, y en la imperiosa necesidad de dar respuestas a trabajadores jóvenes, a jubilados y pensionados, frenar y revertir la exclusión y la pobreza, y reformular el vínculo con los Estados Unidos a partir de un acuerdo integral para solucionar la problemática de la emigración de mexicanos al país del norte, en un contexto en el que se asume como crucial concertar soluciones definitivas en las negociaciones pendientes por el NAFTA³⁸. Asimismo, la situación particular de los casi 12 millones de mexicanos que viven ilegalmente en los Estados Unidos, es un tema central en la agenda bilateral y probablemente se convierta en la piedra de toque del nuevo vínculo que se pretende instalar con los Estados Unidos, bajo un marco de respeto mutuo a la soberanía e integridad de ambos países, ya que AMLO ha sido muy crítico sobre el manejo abiertamente subordinado de Peña Nieto a las agendas agresivas de migración y NAFTA enarboladas por Trump.

En cualquier caso, en lo que respecta a los Estados Unidos, el objetivo de la nueva administración de López Obrador, que asume en diciembre de 2018, girará en torno a cuatro ejes centrales: migración, seguridad, renegociación del tratado de libre comercio y desarrollo³⁹. Se ha orientado la idea de una propuesta de solución integral a estas problemáticas, al tiempo que se ha reafirmado el respeto irrestricto a los principios históricos de la política exterior mexicana, con la reivindicación de la no intervención en los asuntos internos de otros países y la búsqueda de la integración latinoamericana como objetivos centrales, lo cual supone una reorientación estratégica de las prioridades de la política exterior mexicana, en clave de recuperación de la histórica tradición de los

³⁶ <https://www.pagina12.com.ar/109382-un-hijo-de-la-revolucion-toma-el-mando-de-cuba>

³⁷ <https://www.pagina12.com.ar/125833-lopez-obrador-el-persistente>

³⁸ <https://www.pagina12.com.ar/129318-doble-carambola-a-tres-bandas>

³⁹ <https://www.pagina12.com.ar/129557-trump-se-acerca-a-putin-y-lopez-obrador>

primeros tiempos de la revolución mexicana. Más allá de estas aproximaciones, tendremos por delante un desafío plagado de incerteza, pero a la vez esperanzador en términos de las fuertes implicancias simbólicas y materiales que México tiene para con toda la región.

En conclusión, América Latina entrega hoy un panorama turbulento, con conflictos políticos, sociales, económicos y ambientales que atraviesan todas las geografías y a todas las orientaciones político-institucionales, en un contexto hemisférico caracterizado por una nueva ofensiva unilateral de los Estados Unidos, que intenta imponer una agenda de carácter securitista y ampliamente relacionada con sus intereses económicos, comerciales y financieros.

En este punto, lo que nos indica el panorama regional, es que parece configurarse, de manera incipiente, un escenario de reacomodamiento y realineamiento ante los Estados Unidos que asume distintas caracterizaciones y que divide a nuestros países ante la posibilidad de fortalecer una salida soberana compartida, camino que hoy parece ampliamente ensombrecido, incierto y problemático. En definitiva, nuestra región es hoy un *territorio en disputa*...